Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

**Chile**

Programa de Apoyo a la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile

(CH-L1110)

**Análisis Económico**

**Análisis Económico[[1]](#footnote-1)**

**Introducción**

En septiembre de 2015, el Gobierno de la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron la realización de un Programa de Apoyo a la Agenda de Probidad y Transparencia (APT).

El programa tiene como objetivo principal apoyar a la implementación de la APT de Chile, por medio de medidas de política dirigidas al cumplimiento de estándares de ética, integridad y transparencia en el funcionamiento del sector público, en sus aspectos legales y administrativos. Este objetivo general se estructura en tres componentes que se describen a continuación:

**a) Estabilidad Macroeconómica.** La implementación de las políticas previstas en el programa contribuye al mantenimiento de un marco macroeconómico apropiado.

**b) Asegurar mayor transparencia e integridad en la gestión pública.** El objetivo es fortalecer el marco legal e institucional según los principios de probidad administrativa y de transparencia, y el derecho de acceso a la información pública, que define la ley. Para ello se propone: (i) fortalecer la integridad en la gestión pública, mediante el proyecto de ley de probidad en la función pública que ampliará y fortalecerá el sistema de declaración de intereses y de patrimonio, y el proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de interés, que reforzará el sistema de inhabilidades y restricciones para ingresar y para dejar la función pública; (ii) incorporar por primera vez en la legislación nacional, el delito de corrupción entre particulares en un proyecto de ley que tipifique y sancione el delito de corrupción y cohecho entre particulares, en adición al aumento de las penas asociadas a estos delitos en el ámbito del ejercicio de la función pública; y (iii) fortalecer la institucionalidad responsable de administrar la actividad electoral a partir de un proyecto de ley orgánica constitucional que fortalezca las facultades administrativas y de fiscalización del SERVEL, tales como la facultad de supervisar la rendición de cuentas, de realizar y ordenar auditorías a los estados anuales de cuenta pública, la facultad de acceder a los libros de cuentas y documentos que permitan fiscalizar el estado financiero de los sujetos bajo su supervisión, entre otras.

**c) Asegurar probidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos, en el fortalecimiento de la profesionalización de la gestión pública, y promover conductas probas entre los diferentes actores de la sociedad.** El objetivo es asegurar la observancia de probidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos, en el fortalecimiento de la profesionalización de la gestión pública y en los negocios del sector privado, así como promover conductas afines entre la ciudadanía. Para ello se propone: Para ello se propone: (i) perfeccionar el SADP y fortalecer las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) a partir de un proyecto de ley que propone: (a) en lo que refiere al SADP, ampliar la inclusión de nuevos servicios públicos y cargos, mejorar la gobernanza y fortalecer las garantías de mérito y profesionalismo, del sistema, y vincular de modo efectivo la gestión del desempeño de los altos directivos públicos con los objetivos estratégicos del gobierno y objetivar su desvinculación, entre otros; y (b) en lo que refiere a la DNSC, otorgar más funciones y atribuciones a ésta que le autoricen impartir directrices a los servicios públicos en materias de gestión y desarrollo de personas; (ii) ampliar la difusión y la transparencia de las convocatorias públicas a concursos de empleo público mediante un instructivo del Ministerio de Hacienda para el uso obligatorio del portal "Empleos Públicos" ([www.empleospublicos.cl](http://www.empleospublicos.cl)) de la DNSC para todo tipo de contratos de trabajo, favoreciendo a su vez la igualdad en el acceso a éstos; (iii) definir estándares de comportamiento para el desempeño probo y transparente de la función que desarrollan los funcionarios públicos a partir del establecimiento de directrices generales que orientarán la elaboración de códigos de ética de los distintos servicios públicos; (iv) fortalecer las exigencias de probidad por parte de los compradores públicos mediante la revisión y mejora de la normativa reglamentaria de compras públicas, como las referidas a la información pública bajo nuevas exigencias de transparencia, como por ejemplo la publicación de criterios y ponderaciones que se asignen a los oferentes, la integración de la comisión evaluadora, y la recepción y cuadro de ofertas , entre otras; (v) fortalecer la institucionalidad responsable de la aplicación de la ley de concesiones a fin de mitigar riesgos de captura mediante un proyecto de ley que cree, en el MOP, la Dirección General de Concesiones y que fortalezca la Unidad de Diseño y Planificación de Proyectos de Concesiones de ese ministerio; (vi) crear una nueva institucionalidad para la entidad encargada de la supervisión de los mercados de valores y seguros, transformando la actual Superintendencia en una Comisión, e introduciendo mejoras para dotarla de mayor capacidad regulatoria, establecer sistemas de delación compensada y programas de protección de informantes, así como extender el beneficio de defensa legal a todos los funcionarios de agencias reguladoras; y (vii) hacer obligatoria la elaboración de un plan de formación ciudadana para los niveles de enseñanza básica y media en todos los establecimientos educacionales, promoviendo la formación de valores cívicos, mediante un proyecto de ley que así lo defina.

**Estadísticas e indicadores de impacto**

Históricamente, Chile ha ocupado un lugar de preponderancia en América Latina y el Caribe (ALC) en materia de capacidad institucional del Estado para el diseño e implementación de políticas públicas, posición que se refleja en distintos rankings que miden la eficiencia, efectividad y transparencia de la gestión pública. La mayoría de ellos presentan niveles de desempeño semejantes al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

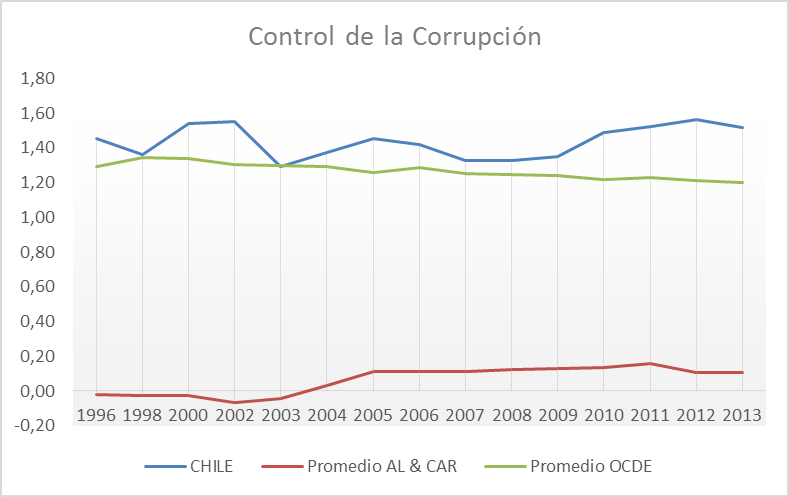
El índice de percepción de la corrupción[[2]](#footnote-2) lo sitúa en el año 2014 en el puesto número 21 de 175 naciones en el ranking de naciones menos corruptas, lugar que dentro de la región sólo comparte con Uruguay.

Los indicadores del Banco Mundial respecto a gobernanza, anticorrupción y libertad y compromiso ciudadano colocan al país muy por encima del promedio de ALC.

El Índice de Control de la Corrupción refleja las percepciones de la medida en que el poder público se ejerce en beneficio privado, sea un nivel de corrupción insignificante o de gran escala, así como también refleja la "captura" del Estado por minorías selectas e intereses privados. Como se puede observar en el Gráfico 1, en el periodo de 1996 a 2013, Chile se encuentra muy por arriba del promedio de ALC y, con excepción de los años 1998 y 2003, supera al promedio de los países miembros de la OCDE. Según las mediciones del Banco Mundial en 2013, en temas de manejo de corrupción Chile obtuvo un puntaje de 1,52%, en comparación a 0,11% que es el promedio de la región.

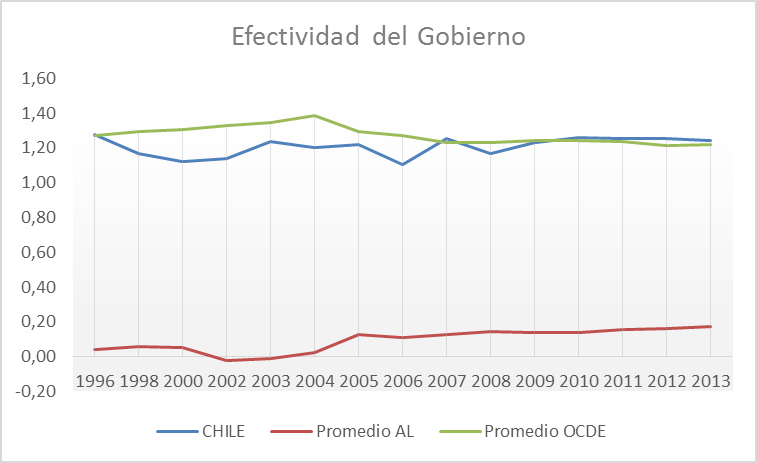
Otro indicador de impacto a considerar es la efectividad del gobierno, medida que captura la percepción de la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas políticas. El Gráfico 2 muestra que Chile está posicionado en un lugar semejante al del promedio de los países miembros de la OCDE principalmente en el periodo comprendido entre 2008 y 2013. El índice muestra un valor de 1,25 para Chile para el año 2013, semejante al del promedio para OCDE (1,22) y muy por arriba del promedio que evidencia ALC (0,17).

**Gráfico 1.**



Fuente: Elaboración propia en base a los Indicadores del Banco Mundial.

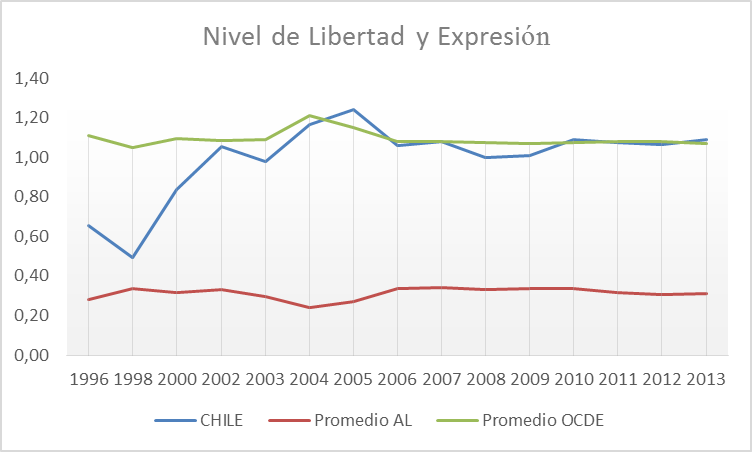
**Gráfico 2.**



Fuente: Elaboración propia en base a los Indicadores del Banco Mundial.

Asimismo, la medida en que los ciudadanos de un país pueden participar en la elección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de expresión de los medios de comunicación es relevante en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos del programa. Como se observa en el Gráfico 3, dicha medida muestra una mejora significativa desde el año 1998 dejando muy atrás al promedio de los países de ALC y convergiendo al nivel del promedio de los países miembros de la OCDE.

**Gráfico 3.**

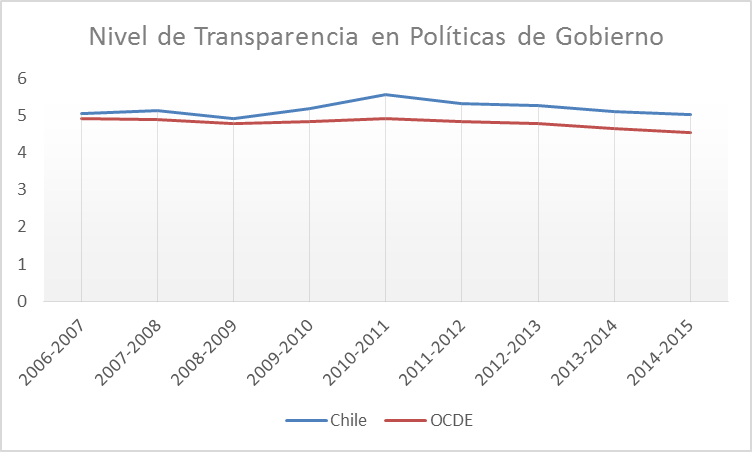


Fuente: Elaboración propia en base a los Indicadores del Banco Mundial.

Otro indicador interesante es el Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial. Dentro de dicho índice hay medidas de transparencia en políticas de gobierno, de ética y corrupción y de nivel de pagos irregulares y coimas, entre otras.

El Gráfico 4 muestra que Chile ha logrado mantener altos niveles de transparencia en políticas de gobierno, siendo los valores cercanos y hasta superiores que el promedio de los países miembros de la OCDE. El indicador de transparencia en políticas del gobierno[[3]](#footnote-3) es de aproximadamente 5,2 en promedio para las mediciones de 2006-2007 a 2014-2015, mientras que para el mismo periodo el promedio para los países de la OCDE corresponde a 4,8.

**Gráfico 4**

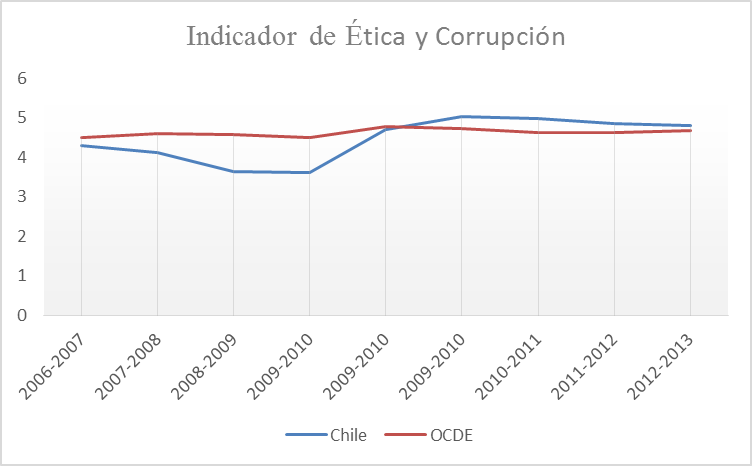


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foro Económico Mundial.

Adicionalmente, se han dado mejoras en materia de ética y prevención de la corrupción. El indicador de ética y corrupción[[4]](#footnote-4) evidencia un promedio de 4,4 en las medidas de 2006-2007 a 2013-2014, comparado a un promedio de 4,6 de los países de ingreso alto de la OCDE para el mismo período. El Gráfico 5 muestra la evolución del indicador para dicho periodo.

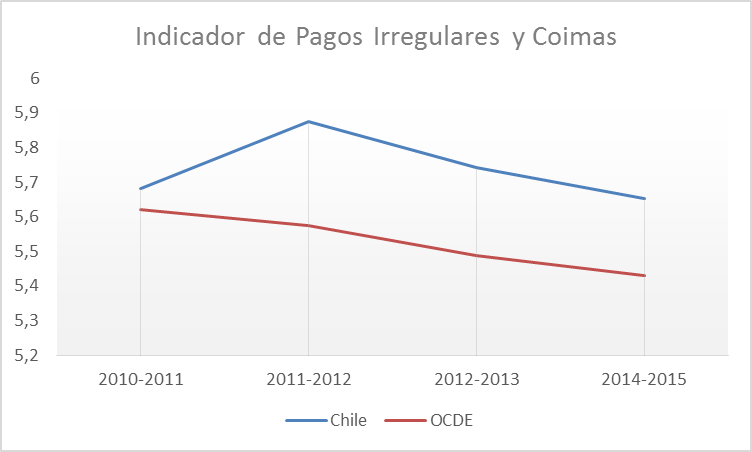
Por el contrario, como se puede observar en el Gráfico 6, el sub-factor que mide la existencia de pagos irregulares y coimas[[5]](#footnote-5) para Chile es superior al promedio de la OCDE pero desde la medición para el periodo 2011-2012 viene empeorando y se encuentra en niveles menores a los correspondientes para el año 2010-2011. Asimismo, el sub-factor que mide el favoritismo de las decisiones de los funcionarios evidencia para Chile promedios semejantes al promedio de los países miembros de la OCDE. Sin embargo, en las últimas mediciones el indicador para Chile empeoró respecto de la ventaja que había sacado al promedio de la OCDE en la medición del periodo 2011-2012 derivando en niveles similares en la última medición correspondiente al periodo 2014-2015.

**Gráfico 5**



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foro Económico Mundial.

**Gráfico 6**

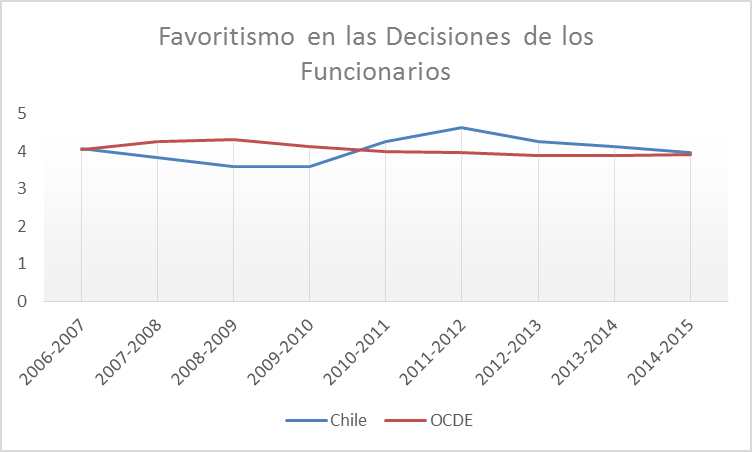
****

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foro Económico Mundial.

Respecto a indicadores de cómo se experimenta en situaciones cotidianas el estado de derecho surge el Índice de Estado de Derecho y Justicia[[6]](#footnote-6) que se construye en base a 8 categorías entre las que se incluyen: (i) restricciones en el poder de gobernancia, (ii) ausencia de corrupción, (iii) apertura del gobierno, (iv) derechos fundamentales, (v) orden y seguridad, (vi) autoridad regulatoria efectiva, (vii) justicia civil y (viii) justicia penal.

Según datos del año 2015, el Índice de Estado de Derecho y Justicia es de 0,68 para Chile, siendo de 0,51 para el promedio de ALC y de 0,73 para el promedio de la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y América del Norte. Chile ocupa la tercera posición a nivel regional, la posición número 25 en los países con el mismo nivel de ingreso y la posición 26 dentro del ranking global.

**Gráfico 7**



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Foro Económico Mundial.

Uno de los aspectos que se evalúa dentro de la categoría de derechos fundamentales es la igualdad en el trato y ausencia de discriminación. El promedio para la UE, EFTA y América del Norte (0,73) y el promedio de ALC (0,53) supera al valor del índice para Chile (0,51), sugiriendo que resta mucho por hacer en esta dirección.

Asimismo, dentro del factor que mide la autoridad regulatoria efectiva se encuentra un sub-factor relacionado con el cumplimiento del debido proceso en los procedimientos administrativos. En este caso, Chile obtiene un puntaje de 0,45, comparado con el 0,39 que corresponde al promedio de ALC y con el 0,62 que corresponde con el promedio de los países de altos ingresos.

A pesar del buen desempeño general de estos indicadores, la existencia de debilidades institucionales y regulatorias que opacan el desempeño de la gestión pública en áreas clave para la prevención y el control de la corrupción y la necesidad de consolidar una cultura cívica apegada a los mayores estándares de probidad, tanto en el Estado como en la sociedad, son las razones por las cuales el Gobierno de Chile se propuso una agenda de modernización del Estado para fortalecer los estándares y prácticas de transparencia y probidad en la gestión pública integrada en el Programa de Gobierno “Chile para Todos”[[7]](#footnote-7). Los últimos escándalos de corrupción en los ámbitos públicos, privados y en lo político, crearon un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos respecto de sus representantes. Esto derivó en la creación del *Consejo Asesor Presidencial contra el Tráfico de Influencias, Conflictos de Interés y Corrupción*[[8]](#footnote-8), cuyas propuestas resultaron integradas dentro de la APT.

El programa descripto en el presente informe tiene como objetivo principal apoyar a la implementación de la APT de Chile reconociendo explícitamente la existencia de desafíos[[9]](#footnote-9) respecto al marco legal e institucional necesario para garantizar que la gestión pública sea guiada en estricto apego a principios de ética, integridad y transparencia, para el eficaz control de la corrupción.

Por consiguiente, se espera que los componentes del programa evidencien su cumplimiento mediante una mejora en los siguientes indicadores propuestos:

a) Índice de Control de la Corrupción[[10]](#footnote-10).

b) Efectividad del Gobierno[[11]](#footnote-11).

c) Nivel de Libertad y Compromiso de sus Ciudadanos[[12]](#footnote-12).

d) Índice de Competitividad Global[[13]](#footnote-13).

e) Índice de Estado de Derecho y Justicia[[14]](#footnote-14).

**Análisis de impacto**

Teniendo en cuenta la amplitud del conjunto de reformas que se desean evaluar, el análisis subsiguiente se concentra en proveer evidencia empírica del potencial impacto del programa sobre los indicadores descriptos.

El análisis de impacto se realizará principalmente en torno a 3 ejes principales, a saber: (1) mejorar la corrupción o la transparencia del estado, (2) mejorar el proceso de contratación de empleados en el sector público y (3) mejorar la fiscalización del mercado de valores.

La literatura acerca de los impactos que tiene la corrupción, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, es abundante.

Uno de los primeros estudios que relaciona indicadores de honestidad y eficiencia burocrática con crecimiento económico y que se enfoca en las consecuencias macroeconómicas negativas de la corrupción es el de Mauro (1995). El autor comienza reconociendo que no solo las instituciones afectan el desempeño económico sino que las variables económicas pueden afectar a las instituciones. Para resolver el problema de endogeneidad originado por dicha simultaneidad utiliza como instrumento un índice que mide la probabilidad en que dos personas del mismo país elegidas al azar no pertenezcan al mismo grupo étnico-lingüístico. La evidencia le sugiere una relación negativa y significativa entre la corrupción y la inversión privada y por lo tanto, entre la corrupción y el crecimiento económico[[15]](#footnote-15).

De la misma manera, muchos autores han intentado asociar a la corrupción con la democracia, siendo la primera una amenaza para la segunda[[16]](#footnote-16). A estas conclusiones arriban diversos trabajos empíricos que miden la corrupción a través de índices de percepción de la corrupción[[17]](#footnote-17). Pero el trabajo más interesante dentro esta línea de investigación es el de Seligson (2006) que propone una medida de la corrupción dada por la experiencia individual obtenida de una encuesta pública de opinión sobre comportamientos y valores democráticos realizada en 6 países latinoamericanos. El autor concluye que la corrupción desgata la legitimidad de las democracias debilitando la confianza de los ciudadanos en sus propios regímenes y socavando la confianza interpersonal que afecta las relaciones de la sociedad civil[[18]](#footnote-18).

En otra línea de investigación, se ha demostrado que la existencia de corrupción en los organismos públicos implica un sobreprecio en las compras realizadas por dichas instituciones y que dichos precios están correlacionados con la estructura de gobierno.

Por un lado, en Bandiera et al. (2009) se hace un esfuerzo para diferenciar los problemas de ineficiencia derivados de la gestión pública de los problemas generados por la corrupción. Los autores explotan un experimento natural que surge de una política asociada a una central de compras de la administración pública italiana y analizan las compras de bienes estandarizados realizadas por los organismos públicos. Para lograr la diferenciación entre ineficiencia y corrupción proponen una distinción entre despilfarro activo, cuando hay implicado un beneficio directo o indirecto para el tomador de decisión del estado (por ejemplo, los sobreprecios pagados a cambio de un soborno), y despilfarro pasivo, cuando no hay implicado ningún beneficio para éste (por ejemplo, cuando los funcionarios no poseen habilidades para minimizar costos o no tienen incentivos para minimizarlos o cuando debido a regulación estatal excesiva la adquisición se entorpece e incrementa los precios promedios de lo que pagan los organismos públicos). Las tres conclusiones principales de este trabajo son que: (i) algunos organismos pagan un precio sistemáticamente superior a otros por el mismo bien, (ii) dichas diferencias de precios están correlacionadas con la estructura de gobierno y (iii) los sobreprecios están asociados principalmente al despilfarro pasivo, que representa un 83% del despilfarro total estimado. Adicionalmente, la evidencia sugiere que el despilfarro activo puede implicar un sobreprecio del 11% en las compras de bienes.

Por el otro lado, y en concordancia con estos resultados, Di Tella y Schargrodsky (2003) explotan un evento único de control de la corrupción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) luego de un cambio de gobierno y estiman que los funcionarios públicos de los hospitales de dicha ciudad pagaban un sobreprecio de 10% aproximadamente antes de la implementación de la política de anticorrupción.

A nivel microeconómico, se ha asociado fuertemente a la corrupción con la ineficiencia de la firma. Dal Bo y Rossi (2007) investigan los determinantes de la ineficiencia técnica de las firmas en un modelo simple donde la corrupción produce una desviación por parte de la gerencia que se aleja de la supervisión y la coordinación necesaria en el proceso productivo eficiente. Los autores concluyen que la corrupción está fuertemente asociada con la ineficiencia al nivel de la firma en el sentido que los países más corruptos utilizan una mayor cantidad de trabajadores para producir el mismo output. Los resultados se mantienen para todas las pruebas de robustez, en las cuales se incluyeron diferentes medidas de ineficiencia y output, y cuando se instrumenta por corrupción.

La corrupción también se suele identificar con salarios bajos en el sector público[[19]](#footnote-19). Utilizando un indicador de salarios del sector publico basado en datos macroeconómicos[[20]](#footnote-20), Van Rijckeghem y Weder (1997) proveen evidencia empírica de la relación negativa entre corrupción y salarios de los empleados públicos entre países, pero no dentro de los mismos a través del tiempo. Los resultados sugieren que un aumento relativo en el pago de 1 a 2 está asociado con una mejora de alrededor de 1 punto en el índice de corrupción. Le et al. (2013) llegan a resultados similares con un indicador de salarios basados en datos microeconómicos. Por último muchos autores llegan a la conclusión de que, a pesar que la relación negativa entre corrupción y salarios de los empleados públicos entre países existe, dada la estructura del sector, reducir la corrupción únicamente mejorando los salarios es altamente costoso[[21]](#footnote-21). Acorde a este argumento, Le et al (2013) sugiere que el rol de los salarios del gobierno en la reducción de la corrupción disminuye a medida que los países se vuelven más ricos, debido a que las rentas que se pueden extraer son mayores dados los salarios que superan los salarios de subsistencia.

Ahora bien, se puede sugerir que salarios más altos pueden aumentar la calidad de los funcionarios porque se genera la competencia necesaria para aumentar los incentivos de aquellos que tienen mayores habilidades o capacidades para desempeñarse en un cargo[[22]](#footnote-22). En este sentido, Dal Bó et al. (2013) estudian una campaña de reclutamiento para cubrir puestos del sector público en México en la que los salarios fueron anunciados al azar a través de los sitios de reclutamiento y las ofertas de trabajo fueron aleatorizadas posteriormente. Las pruebas sugieren que efectivamente los salarios más altos atraen candidatos más capaces pero el resultado más interesante es que no hallan evidencia de la existencia de efectos de selección adversa sobre la motivación[[23]](#footnote-23). Estos resultados implican que los salarios más altos cambian la estructura de incentivos del agente logrando atraer a agentes calificados y motivados al sector público. Adicionalmente, encuentran que las tasas de aceptación de la oferta laboral aumentan con una oferta de salarios más alta. Otro resultado interesante a la que arriban los autores es que los salarios más altos ayudan a compensar las menores tasas de aceptación debidas a características negativas de la oferta laboral tales como la distancia o como el malo entorno municipal. Finalmente, una mejora en la calidad de empleados públicos podría generar una mayor eficiencia en el sector asociada ésta a un aumento en la cantidad y calidad del output producido. Ya se ha argumentado que el despilfarro asociado a problemas de eficiencia en el sector público puede ser realmente significativo y que combatir estos problemas puede implicar grandes ahorros públicos[[24]](#footnote-24).

Otro aspecto a considerar a la hora de evaluar el impacto de las políticas de anticorrupción es que la falta de transparencia puede estar asociada con falta de competencia en el proceso electoral y con el surgimiento de dinastías. El argumento de que la falta de transparencia en el proceso de contrataciones favorece el nepotismo no es nuevo. La existencia de redes sociales informales (como por ejemplo los contactos familiares) ha sido asociada a una entrada rápida al mercado laboral, al rápido crecimiento dentro de la estructura de la firma y a mejores posiciones o cargos laborales[[25]](#footnote-25).

En primer lugar, el surgimiento de dinastías políticas puede tener consecuencias socioeconómicas relevantes. Las dinastías políticas pueden afectar la legitimidad de la democracia y la calidad de las políticas de gobierno[[26]](#footnote-26) debido a que tienen incentivos para implementar políticas que incrementen sus ventajas y garanticen la permanencia en el poder, lo cual potencia la aparición de clientelismo político y corrupción en países institucionalmente débiles. Utilizando un modelo de regresión discontinuada para datos de municipalidades de Brasil, Bragança et al (2015) buscan determinar cómo las dinastías políticas de los intendentes afectan la calidad del gobierno local. Los autores encuentran evidencia a favor de un mayor gasto de recursos, especialmente orientados a inversiones en infraestructura urbana, salud y sanidad. Sin embargo, dicho aumento del gasto no estaría asociado a una mejora en el crecimiento y el empleo ni a una mejora en la calidad de la infraestructura urbana o en los servicios de salud y educación públicas.

En segundo lugar, las dinastías políticas pueden tener consecuencias negativas sobre el mercado laboral. Las mencionadas redes sociales informales se consideran un activo sumamente valioso para aquellos agentes que carecen de habilidades para desempeñarse en un determinado cargo[[27]](#footnote-27) y, en este caso, pueden traer aparejado una mala asignación de recursos. Esto ha sido frecuentemente explorado en el sector privado generalmente estudiando el desempeño de firmas familiares[[28]](#footnote-28).

De acuerdo con estos resultados, la aparición de clientelismo político, ineficiencia y corrupción podría traer aparejado una reducción en la calidad del gobierno debido a que el conjunto de posibles gobernantes se ve limitado a un conjunto de individuos[[29]](#footnote-29) que no son seleccionados en sus puestos de trabajo según su capacidad o capital humano[[30]](#footnote-30). Geys (2015) encuentra que las dinastías políticas tienen un efecto significativo sobre el capital humano de los políticos relacionado con menores niveles de educación cuando el proceso de selección de funcionarios está controlado por funcionarios actualmente en el poder y que las diferencias en los niveles educativos se profundizan cuando las restricciones en dicho proceso disminuyen. La capacidad del funcionario es fundamental a la hora de tener en cuenta el despilfarro existente dentro de los organismos públicos y que está asociado a problemas de ineficiencia dentro del Estado[[31]](#footnote-31).

Por último, la literatura empírica sobre estrategias de anticorrupción basadas en controles o supervisión es muy limitada. En 1974, Becker y Stigler argumentaron que los agentes bajo supervisión tenderían a ser menos corruptos si se les paga salarios altos[[32]](#footnote-32). Este argumento es consistente con lo descripto anteriormente sobre que los salarios más altos podrían eliminar algunas ineficiencias generadas por la corrupción pero incorpora el concepto de la supervisión o control como condición necesaria para que la corrupción disminuya. Di Tella y Schargrodsky (2003) hallan evidencia consistente con el modelo de Becker y Stigler. Sus estimaciones sugieren que, dado el volumen de compras de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, las políticas de salarios anticorrupción podrían ser rentables incluso para costos de implementación de auditorías de compra realmente altos. A similares resultados llegaron Bandiera et al. (2009) sugiriendo que las agencias centrales de compra pueden generar considerables ahorros públicos. Del análisis realizado por los autores se desprende que los organismos públicos italianos que realizaron sus compras a través de la agencia central de compras lograron un ahorro del 28% del precio de compra. Finalmente, pareciera ser que el grado de intensidad de las auditorias y controles es una característica fundamental para que las políticas de anticorrupción sean efectivas[[33]](#footnote-33).

Existen algunos trabajos empíricos que intentan medir el impacto que tiene la corrupción en los mercados sin controles o regulaciones. En un análisis dentro del mercado financiero, Khwaja & Mian (2005) utilizan un conjunto de datos de nivel de préstamo de más de 90.000 empresas que representan el universo de préstamos corporativos en Pakistán entre 1996 y 2002 para investigar las rentas a empresas políticamente conectados con la banca. Los autores clasifican una empresa como política si su director participa en una elección y de esta manera, examinan el alcance, la naturaleza y los costos económicos de la provisión de fondos políticos. Entre algunos de sus resultados, encuentran que las empresas políticas prestan el 45 por ciento más y tienen tasas de morosidad un 50 por ciento más altas. Este trato preferencial se produce exclusivamente en los bancos del gobierno, debido a que los bancos privados no ofrecen favores políticos. Por último, estiman que los costos totales[[34]](#footnote-34) de las rentas políticas son de entre 0,3% y 1,9% del producto bruto interno anual.

Para citar otro ejemplo, Wei (2000) estudia el efecto de la corrupción sobre la inversión extranjera directa y una de sus conclusiones principales sugiere que un aumento en el nivel de corrupción en un país receptivo reduce la inversión directa extranjera recibida.

A pesar de la falta de evidencia empírica del impacto de la supervisión en los mercados financieros, se puede argumentar que dicho impacto no debe ser desechado al evaluarse políticas de transparencia. En 2013, la sociedad chilena comenzó un periodo de desconfianza del empresariado con el caso “Cascadas”, en el cual la Superintendencia de Valores y Seguros determinó una violación reiterada a la Ley de Mercado de Valores y/o la Ley de Sociedades Anónimas en distintas operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas perjudicando a otros. En base a estas operaciones, la Superintendencia de Pensiones estimó una pérdida potencial de hasta 44 millones de dólares de fondos de pensiones mientras que las multas incluidas en la resolución alcanzaron un monto de 164 millones de dólares[[35]](#footnote-35). Esto sugiere que la magnitud del impacto de la fiscalización del mercado de valores no debe ser subestimado.

Como ha sido demostrado, estimar los ahorros públicos generados por la existencia de políticas anticorrupción, tanto en el ámbito público como en el privado, parece ser determinante para cuantificar el impacto de la fiscalización en los mercados.

**Conclusión general.** La evidencia acerca de los impactos que tienen medidas tendientes a mejorar la transparencia y controlar la corrupción, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, es abundante. Una mayor corrupción está asociada a (i) menores tasas de inversión y, por lo tanto, a menores tasas de crecimiento, (ii) al desgate de la legitimidad de las democracias debilitando la confianza de los ciudadanos en sus propios regímenes y socavando la confianza interpersonal que afecta las relaciones de la sociedad civil, (iii) a sobreprecios en las compras realizadas por las instituciones públicas, (iv) la ineficiencia al nivel de la firma en el sentido que los países más corruptos utilizan una mayor cantidad de trabajadores para producir el mismo output, y (v) a menores salarios de los empleados públicos entre países. La evidencia sugiere que los salarios más altos atraen candidatos más capaces, que aumentan las tasas de aceptación y que ayudan a compensar algunas de las características negativas asociadas al entorno municipal y a la distancia.

Adicionalmente, estimar los ahorros públicos generados por la existencia de políticas anticorrupción y pro-transparencia, tanto en el ámbito público como en el privado, es determinante para cuantificar el impacto de la fiscalización en los mercados. Finalmente, la falta de transparencia en el proceso de contrataciones puede hacer que surjan ventajas dinásticas que afectan la legitimidad de la democracia y la calidad de las políticas de gobierno debido a que tienen incentivos para implementar políticas que incrementen sus ventajas y garanticen la permanencia en el poder, siendo esto un factor que potencia la aparición de clientelismo político, ineficiencia y corrupción en países institucionalmente débiles. Esto podría traer aparejado una reducción en la calidad del gobierno debido a que el conjunto de posibles gobernantes se ve limitado a un conjunto de individuos, que no son seleccionados en sus puestos de trabajo según su capacidad o capital humano.

**Referencias**

Anderson, C. J., & Tverdova, Y. V. (2003): Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies. American Journal of Political Science, 47(1), 91–109.

Bandiera, O., Prat, A. & Valletti, T. (2009): Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment. American Economic Review, 99, 1278- 1308.

Bardhan, P. (2006): The economist's approach to the problem of corruption. World Development 34, 341-348.

Bayer, P., Ross, S.L. & Topa, G. (2008): Place of work and place of residence: Informal hiring networks and labor market outcomes. Journal of Political Economy 116: 1150-1196.

Becker, G., & Stigler, G. (1974): Law Enforcement, Malfeasance and the Compensation of Enforcers. Journal of Legal Studies 3, 1–18.

Bennedsen, M., Nielsen, K., Perez-Gonzalez, F., & Wolfenzon D. (2007): Inside the family firm: The role of families in succession decisions and performance. Quarterly Journal of Economics 122(2): 647-691.

Bertrand M. & Schoar, A. (2006): The role of family in family firms. Journal of Economic Perspectives 20: 73-96.

Besley, T. & Mclaren, J. (1993): Taxes and bribery: The role of wage incentives. Economic Journal103, 119-141.

Bragança, A., Ferraz, C. & Rios, J. (2015): Political Dynasties and the Quality of Government. Working Paper.

Dal Bó, E., Dal Bó, P. & Snyder, J. (2009): Political dynasties. Review of Economic Studies 76(1): 115-142.

Dal Bó, E., Finan, F. & Rossi, M. (2013): Strengthening State Capabilities: The Role of Financial Incentives in the Call to Public Service. Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 128(3), pages 1169-1218.

Della Porta, D. (2000): Social capital, beliefs in government, and political corruption. In S. J. Pharr & R. D. Putnam (Eds.), Disaffected democracies: What’s troubling the trilateral countries? (pp. 202–228). Princeton: Princeton University Press.

Della Porta, D., & Mény, Y. (1996): Democracy and corruption in Europe. London: Pinter.

Di Tella, R. & Schargrodsky, E. (2003): The Role of Wages and Auditing during a Crackdown on Corruption in the City of Buenos Aires. Journal of Law and Economics, University of Chicago Press, vol. 46(1), pages 269-92, April.

Dustmann, C., Glitz A., Schönberg, U. & Brücker, H. (2015): Referral-based job search networks. Review of Economic Studies.

Feinberg, G (2009): The epidemic of petit corruption in contemporary Cambodia: Causes, consequences and solutions”. Crime Prevention and Community Safety 11, 277-296.

Gagliarducci, S. & Manacorda, M. (2014): Politics in the family: Nepotism and the hiring decision of Italian firms. Tor Vergata University, mimeo.

Geys, B. (2015): Political Dynasties, Electoral Institutions and Politicians’ Human Capital. Working Paper, Norwegian Business School BI, Department of Economics.

Gingerich, D. (2004): On unstable ground: Parties, patronage and political corruption in contemporary Bolivia. Paper presented at the Meeting of the American Political Science Association, Chicago.

Golden, M., & Chang, E. (2004): Does corruption pay? The survival of politicians charged with malfeasance in the Postwar Italian chamber of deputies. Paper presented at the American Political Science Association, Chicago, IL.

Heidenheimer, A. J., Johnston, M. & LeVine, V. T. (1989): Political corruption: A user’s manual. New Brunswick: Transaction.

Huntington, S. P. (1968): Political order in changing societies. New Haven: Yale University Press.

Khwaja A. & Mian, A. (2005): Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging financial market. Quarterly Journal of Economics 120:1371–411.

Kramarz F. & Skans, O.N. (2014): When strong ties are strong: Networks and youth labor market entry. Review of Economic Studies 81(3): 1164-1200.

Le, V. H., de Haan, J. & Dietzenbacher, E. (2013): Do higher government wages reduce corruption? Evidence from a novel dataset. CESifo Working Paper No. 4254.

Macchiavello, R. (2008): Public sector motivation and development failures. Journal of Development Economics 86, 201-213.

Mauro, P. (1995): "Corruption and Growth". Quarterly Journal of Economics, CX, 681–712.

Mishler, W. & Rose, R. (2001): What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30–62.

Pharr, S. J. (2000): Officials’ misconduct and public distrust: Japan and the trilateral democracies. In S. J. Pharr & R. D. Putnam (Eds.), Disaffected democracies: What’s troubling the trilateral countries? (pp. 174–201). Princeton: Princeton University Press.

Perez-Gonzalez, F. (2006): Inherited control and firm performance. American Economic Review 96(5): 1559-1588.

Querubin, P. (2013): Families and politics: Dynastic incumbency advantage in the Philippines. New York University, mimeo.

Rose-Ackerman, S. (1999): Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose-Ackerman, S. (2004): Corruption. The Encyclopedia of Public Choice in Charles K Rowley and Friedrich Schneider (eds.), Kluwer Academic Publishers, 67-76.

Rossi, M. A. (2015): Self-perpetuation of political power: Evidence from a natural experiment in Argentina. Universidad de San Andres, mimeo.

Seligson, M. A. (2006): The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America. World Development Vol. 34, No. 2, pp. 381–404.

Treisman, D. (2007): What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? Annual Review of Political Science 10, 211-244.

Ul Haque, N. & Sahay, R. (1996): Do government wage cuts close budget deficits? Costs of corruption. IMF Staff Papers 43, 754-778.

Van Rijckeghem, C., & Weder, B. (1997): Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Services Cause Corruption? IFM Working Paper.

Van Rijckeghem, C. & Weder, B. (2001): Bureaucratic Corruption and the Rate of Temptation: Do Wages in the Civil Service Affect Corruption, and by How Much? Journal of Development Economics 65, 307–31.

Van Rijckeghem, C. & Weder, B. (2001): Bureaucratic corruption and the rate of temptation: Do wages in the civil service affect corruption, and by how much? Journal of Development Economics 65, 307-331.

Villalonga, B. and Amit, R. (2006). How do family ownership, control and management affect firm value? Journal of Financial Economics, 80 (2), 385-417.

Wei, S-J. (2000): How Taxing is Corruption on International Investors? Review of Economics and Statistics, February 2000, 82(1): 1-11.

1. Este estudio fue elaborado por Martin Rossi y cuenta con los comentarios del equipo de proyecto del BID. [↑](#footnote-ref-1)
2. Elaborado por *Transparency International* (TI). [↑](#footnote-ref-2)
3. En escala de 1 a 7, siendo 7 el mejor. [↑](#footnote-ref-3)
4. En escala de 1 a 7, siendo 7 el mejor. [↑](#footnote-ref-4)
5. En escala de 1 a 7, siendo 7 el mejor. [↑](#footnote-ref-5)
6. Elaborado por *World Justice Proyect* (WJP). [↑](#footnote-ref-6)
7. “Chile de Todos – Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018”. [↑](#footnote-ref-7)
8. [Decreto No. 002 de la SEGPRES del 11 de marzo de 2015](http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/03/Decreto.CAP_.pdf). [↑](#footnote-ref-8)
9. Decreto No. 002 de creación del Consejo Asesor Presidencial contra el Tráfico de Influencias, Conflictos de Interés y Corrupción. [↑](#footnote-ref-9)
10. Indicadores del Banco Mundial. [↑](#footnote-ref-10)
11. Indicadores del Banco Mundial. [↑](#footnote-ref-11)
12. Indicadores del Banco Mundial. [↑](#footnote-ref-12)
13. Foro Económico Mundial. [↑](#footnote-ref-13)
14. Proyecto de Justicia Mundial. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mauro (1995). [↑](#footnote-ref-15)
16. Della Porta (2000), Della Porta & Mény (1996), Gingerich (2004), Pharr (2000), Golden & Chang (2004), Huntington (1968), Heidenheimer et al (1989) y Rose-Ackerman (1999). [↑](#footnote-ref-16)
17. Mishler & Rose (2001) y Anderson & Tverdova (2003). [↑](#footnote-ref-17)
18. Seligson (1996). [↑](#footnote-ref-18)
19. Ul Haque & Sahay (1996), Van Rijckeghem & Weder (1997) y Van Rijckeghem & Weder (2001). [↑](#footnote-ref-19)
20. El indicador que utilizan los autores es el ratio entre salarios del sector público y salarios del sector manufacturero. [↑](#footnote-ref-20)
21. Besley & McLaren (1993), Van Rijckeghem & Weder (2001) y Macchiavello (2008). [↑](#footnote-ref-21)
22. Ul Haque & Sahay (1996) y Dal Bó et al. (2013). [↑](#footnote-ref-22)
23. La capacidad es una medida del coeficiente intelectual, la personalidad y la proclividad hacia el trabajo del sector público mientras que la motivación es una medida de la integridad, las inclinaciones pro-sociales y la motivación por el servicio público. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bandiera et al. (2009). [↑](#footnote-ref-24)
25. Bayer et al. (2008) y Dustmann et al. (2015). [↑](#footnote-ref-25)
26. Bragança et al (2015). [↑](#footnote-ref-26)
27. Gagliarducci & Manacorda (2014) y Kramarz & Skans (2014). [↑](#footnote-ref-27)
28. Bertrand & Schoar (2006), Perez-Gonzalez (2006), Villalonga & Amit (2006) y Bennedsen et al. (2007). [↑](#footnote-ref-28)
29. Dal Bó et al. (2009), Querubin (2013) y Rossi (2015). [↑](#footnote-ref-29)
30. Geys (2015). [↑](#footnote-ref-30)
31. Bandiera et al. (2009). [↑](#footnote-ref-31)
32. Becker y Stigler (1974). [↑](#footnote-ref-32)
33. Di Tella & Schargrodsky (2003). [↑](#footnote-ref-33)
34. Dentro de los costos totales se consideran aquellos generados por la morosidad de los préstamos a los políticos y aquellos asociados a que este dinero se invierte mal o no se invierte. [↑](#footnote-ref-34)
35. ### Tjark Marten Egenhoff, Reportaje Internacional, 9 de marzo de 2015, Fundación Konrad Adenauer, Chile.

    [↑](#footnote-ref-35)